

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001 31 05 020 2014 01497 01, promovido por la señora **BERTHA ELIDIA OCHOA ROJAS** en contra de la **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**, el **COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandante frente a la sentencia emitida el 6 de octubre de 2016, por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...*Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...*” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **076**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

La señora Bertha Elidia Ochoa Rojas presentó demanda en proceso ordinario laboral de doble instancia en contra de la Gobernación de Antioquia, el Colegio San Juan Bautista de la Salle y la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, pretendiendo las siguientes declaraciones u condenas:

- 1) Que se declare que laboró al servicio del Colegio San Juan Bautista de la Salle desde 1989 hasta 1999, dictando el área de biología en la jornada nocturna.
- 2) Que se declare que el Departamento de Antioquia debe asumir el tiempo laborado por la demandante al servicio del Colegio San Juan Bautista de la Salle, por lo cual debe expedir y pagar el Bono Pensional Tipo B para convalidar dicho periodo ante Colpensiones.
- 3) Que se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 1° de julio de 2006 con fundamento en la Ley 797 de 2003, intereses moratorios y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones expuso que laboró durante toda su vida al servicio de diversos empleadores, acreditando una densidad de 1.343 semanas, así:

Departamento de Antioquia	Del 01/08/1962 al 09/09/1962
Escuelas POP Eucarist.	Del 07/07/1967 al 09/02/1972
Departamento de Antioquia	Del 22/10/1969 al 31/07/1971
ICA (Cajanal)	Del 08/05/1972 al 01/10/1973
SOC SN VICENTE PAUL (ISS)	Del 11/02/1974 al 17/11/1977
Restrepo Robles y CIA SCA (ISS)	Del 14/06/1988 al 31/12/1988
Restrepo Robles y CIA SCA (ISS)	Del 01/01/1989 al 21/06/1990 Simultaneo
Colegio San Juan Bautista de la Salle	Del 01/01/1989 al 31/12/1999

Bertha Elidia Ochoa Rojas	Del 01/10/1996 al 30/11/1996 Simultaneo
Vida Casa de Funerales (ISS)	Del 01/12/1996 al 31/12/1996 Simultaneo
Vida Casa de Funerales (ISS)	Del 01/01/1997 al 30/11/1997 Simultaneo
Sin razón social (ISS)	Del 01/02/1998 al 28/02/1998 Simultaneo
Parroquia NTRA de Guadalupe (ISS)	Del 01/05/2000 al 31/11/2000
COOP de Trabajo Asociado Fénix (ISS)	Del 01/11/2001 al 31/05/2002
Bertha Elidia Ochoa Rojas (ISS)	Del 01/09/2004 al 30/06/2005
Bertha Elidia Ochoa Rojas(ISS)	Del 01/08/2005 al 31/03/2006
Bertha Elidia Ochoa Rojas(ISS)	Del 01/05/2006 al 31/05/2006

Aduce que laboró para el Colegio San Juan Bautista de la Salle desde el año 1989 hasta 1999 en calidad de docente, dictando el área de biología, en la jornada nocturna, para los adultos mayores.

Indica que, pese a ello, este periodo laboral no se refleja en la historia laboral de Colpensiones ni se ha emitido certificación laboral para bono pensional por parte del Departamento de Antioquia y Colegio San Juan Bautista de la Salle.

Finalmente señala que el 1° de septiembre de 1998, reclamó ante el ISS hoy Colpensiones, la pensión de vejez por considerar cumplidos los requisitos, sin embargo, mediante la Resolución GNR 230433 de 9 de septiembre de 2013 le fue negada, aduciendo la entidad que únicamente acredita 749 semanas.

Colpensiones dio respuesta a la demanda, precisando que no le constan los hechos y que, si bien la actora cumple el requisito de la edad, no acredita la densidad de semanas para acceder a la pensión de vejez que reclama, por esta razón se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló como excepciones

de mérito las de prescripción, imposibilidad de condena en costas, improcedencia de la indexación de las condenas, inexistencia de la obligación por falta de requisitos, improcedencia de intereses moratorios, pago y compensación.

El Departamento de Antioquia, en el escrito de réplica indicó que no le constan los hechos de la demanda, señalando que esta entidad solo se responsabiliza por el tiempo laborado a su servicio que sea debidamente certificado por la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, por lo tanto, frente a la discusión que se plantea, deberán ser probados los hechos y en todo caso, son situaciones que deben ser aclaradas por Colpensiones y el Colegio la Salle.

En virtud de lo anterior, presentó oposición a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de fondo las de ineptitud sustancial de la demanda, prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y la genérica. Igualmente propuso como excepción de carácter mixta la de falta de legitimación en la causa por pasiva.

El juzgado de conocimiento en la audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas dejó sin valor la contestación de la demanda presentada por el Colegio San Juan Bautista de la Salle.

Dentro del trámite procesal, se observa que el Departamento de Antioquia solicitó se integrara como Litis Consorcio necesario por pasiva al Municipio de Medellín, ello por cuanto la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, hace parte las instituciones educativas a su cargo.

En el mismo sentido, solicita el Departamento de Antioquia con ocasión a que las prestaciones sociales de los educadores oficiales, incluidas el reconocimiento y pago de las pensiones, se encuentran a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, de probarse el nombramiento de la demandante en el cargo de docente,

esta tendría la calidad de nacionalizada, por tanto sería esta la llamada a responder en tal caso.

Mediante Auto de 27 de junio de 2016, el a quo deniega esta solicitud ordenando continuar la demanda con las partes ya integradas al proceso.

En sentencia proferida el 6 de octubre de 2016, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín absolvió de las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de imponer costas a la demandante indicando que frente al tiempo laborado con el colegio San Juan Bautista de la Salle, del cual se pretende su declaratoria, no existe el convencimiento absoluto de la existencia del vínculo laboral entre las partes.

Indica además que, pese a que se presentó prueba testimonial, el señor Edwin Fernando Monsalve solo da cuenta del supuesto vínculo laboral por un semestre del año 1996 y la deponente María Rosa Puerta manifestó que las labores de la demandante fueron de alfabetización y remuneradas con una bonificación por servicios prestados, que no tuvo el carácter de salario por lo que era la accionante quien debía cubrir la seguridad social.

Por lo anterior, concluye que no se encuentran probada la relación laboral y, por ende, no hay lugar a declarar la misma, ni menos, a reconocer los periodos laborados aludidos para efectos pensionales. En consecuencia, la accionante no acredita los requisitos mínimos de ley, en específico, la densidad de semanas para acceder a la prestación económica deprecada.

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la demandante interpone recurso de apelación, señalando que conforme a la prueba documental y testimonial allegada al proceso, se logra establecer que su representada laboró al servicio del Colegio San Juan Bautista de la Salle, en iguales condiciones que la testigo María Rosa Puerta Puerta, a quien, si

le fueron efectuadas las correspondientes cotizaciones en seguridad social, ostentando hoy el status de pensionada.

Manifiesta que si bien es cierto, dentro del proceso no se pudo establecer la clase exacta de vinculación laboral, esta si existió materialmente, por ende, conforme a lo dispuesto en la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de mora patronal, no se puede endilgar la carga al trabajador las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones patronales, por lo tanto, debe en el presente caso certificar el departamento de Antioquia el tiempo laborado al servicio del Colegio San Juan Bautista de la Salle, así mismo expedir y pagar el respectivo bono pensional en favor de Colpensiones, a fin de validar este tiempo de servicios para ser tenidos en cuenta como semanas cotizadas o laboradas pudiendo definirse entonces el derecho pensional de la demandante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colpensiones dentro del término legal allegó escrito de alegatos de conclusión, solicitando se confirme la decisión de primera instancia.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia consiste en determinar si a la demandante le asiste derecho a la emisión del Bono Pensional tipo B, con ocasión a la presunta vinculación laboral como docente al servicio del Colegio San Juan Bautista de la Salle por el periodo indicado en el escrito de demanda, y como consecuencia, si le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a retroactivo pensional e intereses moratorios.

CONSIDERACIONES

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, así mismo, el artículo 167 ibidem consagra el principio de la carga de la

prueba, que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que sustenta la excepción.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el principio universal de la carga probatoria, y ha explicado con claridad, que quien afirma una cosa está obligado a probarla.

Es, así pues, como quien pretende o demanda un derecho debe alegarlo; y adicionalmente, debe demostrar los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba al demandado cuando éste se opone o excepciona, aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado. (Sentencia de 5 de agosto de 2009, Expediente 36.549).

En la actividad probatoria respecto al problema jurídico que nos convoca, obra como pruebas relevantes para el objeto de litigio del presente proceso las siguientes:

1. Documento de identidad de la señora Bertha Elidia Ochoa Rojas mediante el cual se acredita que nació el 4 de mayo de 1943.
2. Resolución GNR 230433 de 9 de septiembre de 2013, mediante la cual fue negada la pensión de vejez a la demandante por contar solo con 749 semanas cotizadas en toda su vida laboral.
3. Certificación expedida el 03 de marzo de 2000, por el señor José Rodrigo Zapata Rincón, en calidad de rector del Colegio San Juan Bautista de la Salle, en la cual indica que la señora Bertha Elidia Ochoa Rojas laboró en dicho plantel desde 1989 hasta 1999, dictando el área de Biología, en la jornada nocturna.

4. Solicitud fechada 30 de octubre de 2013, en la cual, a demandante solicita al Departamento de Antioquia expedir la certificación laboral de empleadores para bono pensional, por el tiempo laborado con el Colegio San Juan Bautista de Medellín (hoy Concentración Educativa San Juan Bautista de la Salle) por el periodo 1989 a 1999.
5. Derecho de petición fechado el 10 de febrero de 2014, mediante el cual la accionante solicitó al señor Darío de Jesús Rodríguez Zapata, en su calidad de rector de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle, así mismo obra respuesta con fecha 18 de febrero de 2014, mediante la cual se le informó a la peticionaria la falta de competencia para resolver de fondo a la solicitud de expedir hoja de vida de la demandante, indicando que la custodia de documentos está a cargo del Archivo Departamental, el cual tenía las funciones en la época en la cual se describe la prestación del servicio y al Archivo de la Secretaria de Educación de Medellín, el cual asumió las funciones propias del archivo departamental desde la certificación de la ciudad de Medellín en materia educativa.
6. Respuesta a solicitud con fecha 5 de mayo de 2016, mediante la cual la Directora Jurídica de la Gobernación de Antioquia indica que revisada la planta de cargos de docentes y administrativos se encontró que la señora Bertha Elidia Ochoa Rojas no labora actualmente con la Secretaría de Educación de Antioquia, y por tanto, la información requerida debe ser elevada ante la Secretaria de Educación de Medellín.

DE LA RELACIÓN LABORAL

Para resolver el primer problema jurídico planteado, relativo a la relación laboral que alega la parte demandante sostuvo la señora BERTHA ELIDIA OCHOA ROJAS con el COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE y LA GOBERNACION DE ANTIOQUA, desde el 01 de enero de 1989 a 31 de diciembre de 1999, se procederá a analizar desde los sustentos legales y jurisprudenciales las características propias de las relaciones laborales.

El derecho al trabajo ha sido reconocido en nuestro ordenamiento jurídico como un valor esencial del Estado Social de Derecho, y por ello en el Preámbulo y los artículos 1º, 2º, 25, 39, 48, 55, 56 y 64 de la Constitución Política y el legislador se ocuparon de brindarle una atención especial, reconociéndolo como aquel que le asiste a toda persona para pretender y obtener un trabajo en condiciones dignas, no solo como un mecanismo para asegurar el mínimo vital y nivel de vida digna, sino también como un requisito esencial para la concreción de la libertad, la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad.

El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona natural, denominada trabajador, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, denominada empleador, bajo su continuada dependencia o subordinación, servicio por el cual recibe una remuneración (artículo 22 del CST). Para que se dé una relación de trabajo protegida por la legislación laboral, debe concurrir una tríada de elementos esenciales, cuales son: (i) que la actividad desplegada por el trabajador sea personal, es decir, realizada por sí mismo; (ii) una continua subordinación o dependencia del trabajador, la que faculta al empleador para imponerle reglamentos y exigirle el cumplimiento de órdenes en cuanto al tiempo, modo, calidad y lugar, y (iii) la retribución del servicio, mediante el pago del salario convenido por las partes (artículo 23 del CST).

Conforme a lo anterior, corresponde al trabajador, para el caso particular, a la señora BERTHA ELIDIA OCHOA ROJAS acreditar la existencia de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, así, la prestación personal del servicio a favor de las demandadas, que en los términos del artículo 5 del CST, puede ser cualquier oficio, material o intelectual, siempre y cuando sea desempeñado como persona natural en beneficio del empleador.

Igualmente, acreditar la subordinación, definida como el sometimiento del trabajador a la esfera organicista, rectora y disciplinaria del empleador, donde la obediencia es la premisa principal, siendo este elemento diferenciador de otro tipo de contrataciones, pues se caracteriza por ser irrenunciable e intransmisible.

La subordinación propia de las relaciones laborales es personal, pues el trabajador se somete a la persona del empleador, quien tiene la potestad para dar órdenes directas, implementar horarios, reglamentos internos, exigir permisos para ausentarse del lugar de trabajo, impartir sanciones disciplinarias ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, entre otras, a diferencia de los contratos de índole civil, comercial o administrativo, donde los contratantes se someten al cumplimiento de las obligaciones contraídas, y no a las personas.

Es importante recordar, que la doctrina ha reconocido ciertos indicios que pueden dar lugar a deducir la materialización de una relación laboral, tales como las condiciones locativas de la prestación del servicio, que generalmente serían dentro de la esfera del empleador; la existencia de un horario de trabajo; la ajenidad de los productos y los bienes producidos.

Y finalmente, pero no menos importante, el servicio personal debe ser remunerado con una asignación que es pactada entre los contratantes y que tiene como fin retribuir la fuerza laboral impartida por el trabajador ante el empleador, denominada salario.

Ahora bien, el beneficio probatorio que tiene el trabajador como extremo vulnerable de la relación contractual, no lo exime de las obligaciones procesales y probatorias, es decir, no basta con acreditar sólo la prestación personal del servicio para que se derive inevitablemente la prosperidad de sus pretensiones, sino que, también recae en él la obligación de crear certeza sobre los extremos de la relación laboral que se endilga y respecto a quién.

Empero, en el caso de marras, la parte activa con el escrito de demanda no allegó prueba idónea, que permitiera concluir, más allá de toda duda razonable, que, en efecto, existió una relación laboral entre las partes referidas.

Para la Sala, la valoración de los testimonios realizados por la Juzgadora de primera instancia fue razonable, toda vez que realizó una acertada confrontación entre lo manifestado por cada uno de los deponentes y los demás medios de

prueba, lo cual se enmarca dentro de las facultades que le confiere al sentenciador de instancia el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de apreciar libremente las pruebas aducidas en el juicio para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos, con base en las reglas de la sana crítica.

Al respecto, la Corte Constitucional las define como las reglas del correcto entendimiento humano. “(...) En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el Magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. (...) La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento. (...)” (Sentencia C-622 de 1998)

Así las cosas, le asiste razón a la a quo, cuando concluye que en el presente evento la demandante Bertha Elidia Ochoa Rojas, no cumplió con la carga probatoria referida, pues para acreditar la existencia de un contrato de trabajo con el colegio San Juan Bautista de la Salle, allegó la certificación obrante a folio 27 del expediente, la cual señala:

“Que la educadora BERTA ELIDIA OCHOA ROJAS identificada con documento de identidad 332.399.779 de Medellín, laboró en este plantel desde 1989 hasta 1999, dictando el área de Biología en la jornada nocturna”

Sin embargo, dicha certificación, por si sola, no tiene la fuerza probatoria para dar por sentado el vínculo laboral por las partes, pues no indica claramente la modalidad del contrato que los regía, los extremos temporales concretos, ni extraerse con certeza la concurrencia de los elementos esenciales de contrato de trabajo.

Nótese adicionalmente que al tratarse de una institución de educación de naturaleza pública, las funciones de sus directivos, en este caso “Rector” son regladas, y tal como lo adujo en posterior momento el rector DARIO DE JESÚS RODRÍGUEZ ZAPATA no poseen competencia para acreditar lo pertinente, toda vez que los soportes respectivos son resguardados en el “Archivo Departamental” o “Archivo de la Secretaría de Educación de Medellín”, siendo claro que un servidor público, como lo es el rector de una institución educativa no tiene la facultad para expedir certificaciones cuyo respaldo obra en otras dependencias que no es la propia.

Adicional a lo anterior, se debe relieves que en el documento en comento no se plantea la clase de contratación, la cual, al ser vinculada una entidad pública, y al referirse a docente del área nocturna se convierte en asunto de capital importancia que debió acreditar la parte accionante.

Aunado a lo anterior, la parte demandante pretendió a través de prueba testimonial acreditar la relación laboral, sin embargo, este medio de prueba también resultó insuficiente para probar los hechos que se afirman en la demanda pues realizando un análisis detallado de la misma, puede resaltarse los siguiente, con respecto al testimonio brindado por el señor Edwin Fernando Monsalve:

Ante las preguntas: ¿En qué año entró a laborar en el Colegio San Juan Bautista de la Salle? R/ *Yo entré a trabajar en febrero de 1996, P/ Cuéntele por favor al despacho ¿Qué tipo de vinculación lo unía a usted al colegio? R/ Era un vínculo de carácter departamental de hecho nos pagaban en el cuarto piso de la gobernación. P/ ¿Qué tipo de contrato tenía? R/ Era un contrato para prestar mi servicio como docente. P/ ¿Me refiero a si era un contrato laboral, prestación de servicios, lo suscribía con quien con el departamento o con el colegio directamente? R/ Con el colegio de forma directa porque en el colegio Rafael García Herrera también trabajé, yo tuve un contrato de prestación de servicios, entonces no lo tengo muy claro ahora, por descarte puedo afirmar que era una cosa más directa con el colegio y nos pagaban en el cuarto piso de la gobernación, estoy seguro que no fue un contrato por prestación de servicios sino una cosa más directa con la institución, que era un centro de educación de*

adulto. P/ ¿Usted firmó un contrato? R/ Yo no recuerdo actualmente pero tal vez algún documento tuvo que firmarse.

De lo dicho por el testigo, se advierte en primer lugar, que solo da cuenta del aparente vínculo laboral por el primer trimestre del año 1996, es decir, más de 7 años después de la fecha de inicio de labores que pretende probar la parte demandante, circunstancia que no permite determinar la existencia y características del vínculo laboral que para el proceso interesa, es decir, el de la señora OCHOA ROJAS, pues la diferencia temporal no ofrece la certeza que ambos docentes fueran contratados bajo la misma modalidad, para el mismo programa o funciones y ni siquiera para el mismo empleador.

En igual sentido, no logra ni siquiera demostrarse, la modalidad contractual que vinculaba a las partes, pues el deponente hace referencia a un contrato de prestación de servicios, que dista, desde su naturaleza misma, de los contratos de trabajo.

Por su parte la señora María Rosa Puerta Puerta, precisó ante las preguntas:

P/ ¿Conoce usted a la señora Bertha Elidía Ochoa Rojas? R/ Si P/ ¿Cuánto hace que la conoce y por qué? R/ Hace mucho tiempo, hace por ahí más de 20 años, porque aparte de que somos vecinas, fuimos también compañeras de trabajo en la I.E. San Juan Bautista que en ese tiempo era escuela ¿P/ ¿En qué se desempeñó la señora Bertha Elidía Ochoa Rojas como compañera suya? R/ Ella trabajó en el nocturno dictando biología. P/ ¿En qué época? R/ En el 89, que el colegio, es decir, el nocturno se cogió el bachillerato hasta noveno grado, anteriormente era primaria y a partir de ese año se creó el bachillerato. ¿Desde qué año trabajó usted? R/ Yo trabajé desde el 76 hasta el 2010 más o menos, yo trabajé allá 35 años. P/ ¿Es usted pensionada? R/ Si, soy pensionada. P/ ¿Quién le paga la pensión señora? R/ Me la paga, la fiduciaria, la previsora, pues al menos eso es lo que dice en el recibo. P/ Indíqueme al despacho que vinculación tenía usted con el colegio R/ Yo tenía una vinculación oficial, yo fui nombrada desde 1969 por Decreto, en ese entonces, éramos la modalidad o nos nombraban alfabetizadores nacionales de tiempo completo, ese era mi nombramiento. P/ Indíqueme al Despacho si usted sabe la vinculación que tenía la señora Bertha Elidía Ochoa Rojas en el

colegio R/ Era también un nombramiento, pero a nivel municipal o departamental, fue cuando se crearon los famosos COAN – Centros Oficiales de Adultos, entonces les pagaban con un rubro del departamento. P/ Señora María Rosa, usted en la pregunta anterior, respondió que la demandante había sido vinculada mediante un nombramiento con el Departamento, como usted conoció el documento, vio el contrato, ¿o cómo tiene conocimiento de esa situación? R/ En ese entonces la Secretaría de Educación nombraba alfabetizadores para los COAN y les daba creo que era diferente al de nosotros, era como una notificación o una orden y decía en algunos salía, por ejemplo: Nómbrase para el Centro de Adulto tal a los siguientes educadores, no sé si de pronto ella lo recuerde o lo tenga; porque el de nosotros, el mío particularmente era de la Nación, yo soy nacional. P/ Cuantos contratos o vinculaciones tuvo la señora Bertha con esta Institución Educativa? R/ A ellos cada año les reanudaban el contrato P/ ¿Cada año o cada semestre? R/ Si, como cada semestre, no estoy bien segura, era cada semestre porque allá los ciclos eran por semestre. P/ ¿El ciclo duraba cada semestre? R/ Si P/ ¿Recibía nombramiento previo a la señora Bertha antes de suscribir el contrato? R/ Ellas pasaban en una planilla, es decir, el contrato de los educadores que iban para cada centro de adultos. P/ ¿Usted dice que era en esa época para alfabetizar, eso no era gratuito?.

R/ Lo que pasaba era que, en ese tiempo, es decir, la modalidad era alfabetización de tiempo completo, pero existía esa modalidad, pero hubo como una figura o algo que se llamaba Educación Especial y entonces fue cuando crearon los Centros de Adultos, que propiamente no era alfabetización porque se dictaban todas las áreas, inclusive se dictaban artesanías. P/ ¿Por qué dice que el salario era muy poco? R/ Porque como era una bonificación. P/ ¿Qué quiere decir bonificación señora? R/ Era un salario que no correspondía al legal, al mínimo. P/ ¿Era el salario mínimo? R/ No, eso se llamaba bonificación por servicios prestados. P/ ¿Usted sabe si cotizaba o cotiza la señora Bertha a la seguridad social? R/ No P/ ¿Tenía afiliación a la seguridad social? R/ No. P/ ¿Que tenía? P/ Quien realizaba esos contratos directamente la I.E o el Departamento? R/ Era la oficina de Educación Especial la que realizaba los contratos. P/ ¿Que contratos tenían, contrato de trabajo o por prestación de servicios? R/ Allá llegaba la planilla al colegio con todos los docentes que estaban ahí, que prestaban ese servicio. P/ ¿Tenían las personas que recibían esta bonificación, tenían que afiliarse en forma particular y cotizar a pensiones o esto lo realizaba directamente el Departamento o la Institución Educativa? R/ No, a ellos, cada cual pagaba su seguridad.

Si bien la testigo da fe de la labor realizada por la demandante durante el periodo 1989 a 1999, no se puede inferir, de su testimonio, que en efecto esa vinculación se haya regido por los lineamientos del contrato de trabajo, pues la testigo, no logra manifestar con claridad la relación contractual entre las partes en juicio, ni brinda elementos que permitan aplicar en favor de la parte actora la presunción legal que establece el artículo 24 del C.S.T, de hecho, denomina *bonificación* a la contraprestación recibida por la demandante por los servicios prestados, rubro que guarda notorias diferencias con el salario, como elemento esencial del contrato de trabajo.

Cabe advertir en este punto, que no puede en modo alguno, presumirse que a la demandante y a la testigo las regía la misma vinculación laboral, pues la deponente fue clara en indicar que, hacía parte de la planta docente del orden nacional, nombrada mediante decreto; situación, que por si sola, las ubica en una situación jurídica diferente a la de la accionante, y no puede ser cobijada con le mismo status como lo pretende la parte accionante.

Es importante resaltar, que los vacíos probatorios que se presentan en el presente proceso, no permiten identificar ni siquiera de manera plena el presunto empleador, pues así como no se logra establecer un vínculo laboral, tampoco logra probar plenamente si el beneficiario de las funciones desempeñadas por la demandante, en efecto era el Departamento de Antioquia, el codemandado Colegio San Juan Bautista de la Salle o se trataba de una prestación de servicios profesionales independientes, información que resulta indispensable para efectos de determinar a quien le correspondía asumir lo relativo al Sistema General de Pensiones.

Así las cosas, si bien la demandante pudo prestar sus servicios en favor de la Institución Educativa demanda, ello no implica que su naturaleza haya sido de tipo laboral, advirtiéndose que para la fecha objeto de análisis, tenía plena vigencia el Estatuto Docente consagrado en el Decreto 2277 de 1979, el cual establecía las pautas para la provisión de los cargos como docentes.

En síntesis, tratándose de la existencia de un contrato de trabajo con una entidad pública, no existe en el plenario, acta, resolución, decreto, acto administrativo u otro elemento probatorio que lograra demostrarlo, sin que se pueda establecer si lo que reguló a las partes fue un nombramiento oficial, horas cátedras, plan cobertura, contrato de prestación de servicios u OPS (órdenes de prestaciones de servicio) vinculaciones que son de usanza en materia de educación, al igual que nos obtuvo certificación del Departamento de Antioquia al respecto.

Ni siquiera se logra determinar con certeza el convenio, programa, proyecto en el cual se desarrollaron las funciones, lo que imposibilita realizar un estudio pormenorizado de las características que regularon la eventual relación, situación, que era sin duda, carga de la demandante.

Así las cosas, la Sala evidencia que la señora BERTA ELIDIA OCHOA ROJAS, realmente no logró acreditar que hubiere prestado sus servicios de manera personal y subordinada, consecuentemente, la presunción prevista en el artículo 24 del CST, no logró activarse en favor de la demandante, y por ello, a la misma le correspondía probar las condiciones en que se efectuó la prestación de servicios, los extremos o hitos cronológicos en que se desarrolló, los cuales, por la precariedad de la actividad probatoria desplegada por el extremo activo, no fueron suficientemente acreditados.

DEL DERECHO PENSIONAL.

De la prueba documental alegada, se puede establecer que la señora Bertha Elidia Ochoa Rojas nació el 4 de mayo de 1943, por tal razón tenía 50 años de edad el 1º de abril de 1994 fecha de entrada en vigencia en el sector privado del Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, implicando ello que era beneficiaria, en principio, del régimen de transición previsto en el artículo 36 de esta normatividad.

En virtud de la norma citada se conservó la edad, el tiempo de servicios o el número de semanas de cotización y el monto de la pensión por vejez establecidos

en el régimen anterior, en favor de tres categorías de trabajadores: los hombres con cuarenta o más años de edad, las mujeres con treinta y cinco o más años de edad, y unos y otras que independientemente de su edad tuviesen quince o más años de servicios cotizados.

El régimen anterior al cual se hallaba afiliada la accionante, era el contenido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por medio del Decreto 758 de la misma anualidad, que para acceder a la pensión por vejez exigía sesenta o más años de edad a los hombres o cincuenta y cinco o más años de edad a las mujeres, y un número de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado 1.000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.

Adicionalmente, el Parágrafo Transitorio 4° del Acto Legislativo 001 de 2005 expedido el 25 de julio del mismo año, instituyó el 31 de julio de 2010 como límite para la vigencia del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, y demás normas que lo desarrollan, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen tuviesen cotizadas, al menos, 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, a los cuales se les mantuvo tal régimen hasta el año 2014.

Las historias laborales y los certificados de información laboral generado por el Departamento de Antioquia y por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA obrantes en el expediente, dan cuenta que a la vigencia del Acto Legislativo referido la accionante contaba con 790.2 semanas, que le permitían conservar el régimen de transición hasta el 2014, y que acumula hasta el 31 de mayo de 2006 y durante toda su vida laboral 828.2 semanas, de las cuales 166 semanas corresponden a los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, corridos entre el 4 de mayo de 1978 y la misma fecha de 1998, razón por la cual no consolidó el derecho a la pensión por vejez en los términos del Decreto 758 de 1990.

Debe decirse que esta Sala de Decisión, venía prohiendo la tesis que no era legalmente procedente sumar tiempos públicos no cotizados al ISS, para efectos

del reconocimiento del derecho pensional con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, bajo el entendimiento de la línea jurisprudencial adoptada por la Corte Constitucional, en las sentencias SU-769 de 2014 y T-521 del 18 de agosto de 2015, en las que se indicó, que sólo era procedente tal sumatoria, cuando el afiliado no podía acceder a la pensión de vejez con una legislación distinta al citado Acuerdo.

Según el Tribunal Constitucional, la acumulación es posible Primero, porque el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en ninguno de sus apartes exige que las cotizaciones se realicen de manera exclusiva en el Seguro Social; Segundo, porque los requisitos para acceder a los beneficios del Sistema General de Seguridad Social se acreditan ante el sistema mismo y no ante las entidades que lo conforman; y tercero, porque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 limitó el régimen de transición a solo tres ítems (edad para acceder a la pensión, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la prestación) y estableció que las demás condiciones y requisitos para adquirir el derecho a la pensión por vejez se regirían por las disposiciones contenidas en la Ley referida, entre éstas, las del artículo 13, literal f., 33, Parágrafo 1º y 36 Parágrafo Único, que autorizan la acumulación de tiempos para efectos de la contabilización del número de semanas de cotización requeridas (Sentencias SU-769 del 16 de octubre de 2014; y T-521 del 18 de agosto de 2015).

De otra parte, frente al tema planteado, fue criterio reiterado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que para el reconocimiento de las pensiones de vejez, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, no es posible acumular tiempo laborado en el sector público no cotizado al ISS o cotizadas a otro fondo o caja de previsión social, con semanas cotizadas a este instituto, toda vez que, en sentir de esta Corte, cuando el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 autoriza dicha sumatoria, se refiere a la pensión de vejez del Sistema de Seguridad Social Integral y a la que regula la Ley 71 de 1988. Dicha posición había sido plasmada entre otras, en las sentencias SL-16104 de 2014, SL-16086 de 2015, SL-11241 de 2016, SL-168 de 2016 y SL-4031 de 2017.

No obstante, esa Corte de Casación Laboral en las sentencias, SL-1981-2020 y SL-1947-2020, admitió la posibilidad de la sumatoria de tiempos públicos sin cotización al ISS hoy Colpensiones, con las semanas cotizadas a esta entidad, cuando se solicita el reconocimiento de la pensión de vejez.

Al respecto en la sentencia SL-1947 de 1° de julio de 2020, Radicado 70.918 precisó:

“...En este punto, es oportuno señalar que la jurisprudencia de esta Corporación ha adocinado la improcedencia en la sumatoria de semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales con tiempos de servicios públicos a efectos de conceder la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, bajo el entendido de que esta normatividad no previó expresamente tal posibilidad, como sí lo hizo unos años atrás la Ley 71 de 1988.

En este sentido, la Sala predicó que la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990 solo podía configurarse con el cumplimiento de las edades mínimas allí previstas y un mínimo de 500 semanas de cotización en los 20 años anteriores a éstas o 1000 semanas en cualquier época, bajo el presupuesto que éstas fueran efectivamente aportadas al ISS y en los términos fijados por sus reglamentos.

Asimismo, la jurisprudencia de la casación del trabajo resaltó que el legislador en el año 1993 dispuso el cómputo de tiempos públicos y privados para el acceso a la pensión de vejez, a través de lo dispuesto en el parágrafo 1.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo que éste resultaba aplicable a las pensiones gobernadas en su integridad por esta normativa.

...

No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas.

Para modificar tal criterio jurisprudencial, debe destacarse que tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 tuvo como finalidad esencial proteger las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a pensionarse, a fin que estuvieran cobijados por la legislación precedente, en los aspectos definidos por el legislador.

Este tipo de regímenes se prevé en los sistemas de seguridad social a fin de que los cambios legislativos en materia pensional no sean abruptos para los ciudadanos, sino que su aplicación sea progresiva y gradual y no se afecten las expectativas legítimas de quienes se encontraban cerca de consolidar los derechos prestacionales. Es el establecimiento de condiciones de transición lo que garantiza la aplicación ultraactiva de la disposición anterior, se reitera, en algunos aspectos definidos por el propio legislador.

Específicamente, el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implicó una protección especial para quienes se encuentran cobijados por éste, en el sentido de que la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos ultraactivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de condiciones pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de 1993.

De lo anterior se deriva que si la disposición precedente solo opera para las pensiones de transición en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar las semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así éstos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.

En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el mismo sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la validez de los tiempos como servidor público para el cómputo de las semanas.

Esta lectura es acorde justamente con las finalidades propias de la Ley 100 de 1993, como ley del Sistema Seguridad Social Integral, pues esta regulación permitió que las personas pudieran acumular semanas aportadas o tiempos servidos al Estado, indistintamente, para efectos de consolidar su pensión de vejez, bajo el presupuesto de que los aportes a seguridad social tengan soporte en el trabajo efectivamente realizado.

Lo anterior permite reconocer que, durante su trayectoria profesional, las personas pueden estar unos tiempos en el sector público o en el sector privado, dado que ello hace parte de las contingencias del mercado laboral y lo relevante es que el Estado permita tener en cuenta lo uno y lo otro para el acceso a prestaciones económicas, pues, en últimas, lo que debe contar es el trabajo humano.

La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna.

En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación ultraactiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su interpretación.

En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad.

Es de resaltar que este cambio de criterio jurisprudencial de la Sala está acorde a mandatos superiores y a la defensa del derecho a la seguridad social en tanto garantía fundamental de los ciudadanos, así reconocida por diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que, además de estar ratificados por Colombia, hacen parte del denominado ius cogens...”

Corolario de lo anterior, la nueva interpretación del Órgano de cierre de la jurisdicción laboral, permite la posibilidad de acumular tiempos públicos sin cotización al ISS, hoy Colpensiones, con las semanas cotizadas a esta entidad, aplicando el Acuerdo 049 de 1990, a los beneficiarios de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que esta Sala de decisión acogió esta tesis desde la sentencia del 24 de febrero de 2021, dentro del proceso con radicación 05001310501620170022401 con Ponencia del magistrado Francisco Arango Torres, en cumplimiento de la orden de tutela impartida dentro de la acción Constitucional STL 1078 de 2021.

La Sala acata este criterio jurisprudencial, y, por tanto, acumuló el tiempo laborado por la actora en el Departamento de Antioquia y en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA sin cotizaciones al ISS, hoy Colpensiones, y el tiempo allí cotizado con entidades públicas, empleadores particulares y como trabajadora independiente para resolver el derecho pensional al amparo del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por medio del Decreto 758 de la misma anualidad.

En consecuencia, se concluye que la señora Bertha Elidía Ochoa Rojas no causó su derecho a la pensión por vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, así como tampoco colma las exigencias del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, puesto que cumplió 57 años el día 4 de mayo del 2000, en esta fecha la disposición referida exigía 1.000 semanas de cotización y la accionante sólo contaba, para la época referida, con 680.7 semanas.

En ese orden de ideas, esta Corporación no le queda otro camino diferente a confirmar en su integridad, la sentencia objeto de apelación.

COSTAS PROCESALES

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 365 del CGP, y advirtiendo que el fallo de primera instancia fue confirmado en su integridad, y que la señora BERTA ELIDIA OCHOA ROJAS resultó vencida, la misma será

condenado a pagar las costas procesales en esta instancia. En atención a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP, y el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho para la segunda instancia, la suma de **\$1.160.000**, a favor de las demandadas.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, que se revisa en apelación, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Ante la desventura del recurso de alzada las costas en esta instancia corren a cargo de la señora Bertha Elidía Ochoa Rojas y en favor de Colpensiones. Se fijan las agencias en derecho, en la suma de **\$1.160.0000**.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez
(*con salvamento de voto*)

Francisco Arango Torres

**SALVAMENTO DE VOTO
MAGISTRADO JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ**

Treinta y uno (31) de marzo de 2023

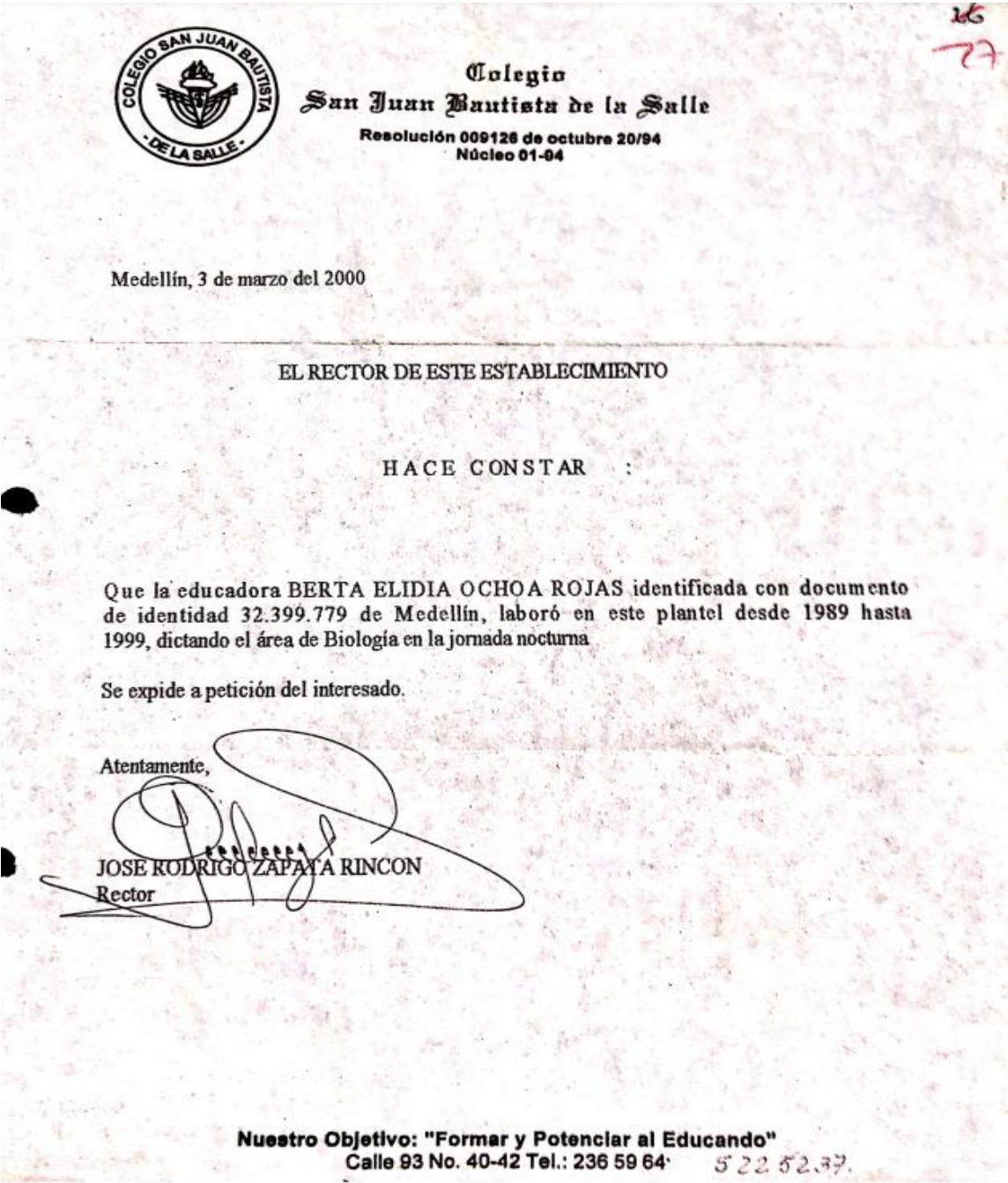
Ref: BERTHA ELIDIA OCHOA ROJAS vs.
COLPENSIONES,
COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE y
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Radicado 05001 31 05 020 2014 01497

Con el debido respecto, expongo mi desacuerdo con la decisión mayoritaria tomada por mis compañeros de la Sala Primera de Decisión Laboral en la sentencia de la referencia. Mis razones son las siguientes:

1.- Lo que pretende la demandante es, *(i)* que se declare la existencia de una relación laboral con el Colegio San Juan Bautista de La Salle entre los años de 1989 a 1999; *(ii)* que, en consecuencia, el Departamento de Antioquia expida y pague el bono pensional tipo B correspondiente al periodo laborado; y *(ii)* que COLPENSIONES reconozca y pague la pensión de vejez

2.- Como quiera que todo parte del éxito de la primera pretensión, la Sala consideró por mayoría, que no estaba acreditada la relación laboral con el centro educativo en mención, y es esta la decisión que me lleva a salvar mi voto.

3.- En primer lugar, la Sala le restó cualquier valor probatorio a la constancia laboral visible de fl. 27 del expediente, aportada en original y expedida y firmada por el Rector del Colegio I. E. San Juan Bautista, así:



4.- Se adujo en el fallo del cual me aparto, que dicha certificación por sí sola carece de fuerza probatoria para acreditar el vínculo laboral, *“pues no indica claramente la modalidad del contrato que los regía, los extremos temporales, ni extraerse con certeza la concurrencia de los elementos esenciales de contrato de trabajo.*

5.- Para mi es evidente que, para acreditar la relación laboral como tal, no se requiere de la prueba de estos elementos accesorios, pues aquello no depende ni de *la modalidad del contrato*, lo cual es irrelevante en ese propósito; o bien, incluso, de los extremos temporales, pues en la forma en que está redactada la carta puede asumirse como fecha inicial el último día del año 1989 y final, el primer día del año 1999 como extremos mínimos probables.

6.- Ahora, aún si admitiera que por sí sola esta prueba no sea suficiente, no veo tampoco ninguna razón para restarle eficacia probatoria al testimonio de la señora María Rosa Puerta Puerta, quien con conocimiento de causa pues fue su compañera de trabajo en la I.E. San Juan Bautista donde laboró – la testigo - entre 1976 y 2010, dio fe de la relación laboral en cuestión, explicando que la actora trabajó en el nocturno dictando biología y exponiendo diversos pormenores de la relación.

Al respecto se lee en la ponencia que no se puede inferir, del anterior testimonio, que esa vinculación se haya regido por los lineamientos del contrato de trabajo, pues la testigo, no *“brinda elementos que permitan aplicar en favor de la parte actora la presunción legal que establece el artículo 24 del C.S.T,”*

Me aparto frontalmente de esta tesis, pues, todo lo contrario, si tanto con la carta laboral como con la declaración anterior, mirados en conjunto, se demuestra la relación laboral durante los años mencionados, se activa justamente la presunción legal en torno a que tal relación estuvo regida por un vínculo laboral, sin que el hecho aparezca desvirtuado en el plenario. Me pregunto: ¿qué más se requería para admitir que la demandante laboró al servicio de la I.E. San Juan Bautista entre 1989 y 1999?

De esta forma dejo asentado mi disenso respetuoso con la decisión mayoritaria en este evento.

Fecha ut supra.

JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ
Magistrado.

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez

Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia
Firma Con Salvamento De Voto

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **06a9eafe21b77769fe2d2137e3e16ceedb6fa0ab3fec1b352e87449492611555**

Documento generado en 31/03/2023 03:11:26 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>